



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
SENADO DE LA REPÚBLICA



PRIMER  
PLAN DE ACCIÓN  
**CONGRESO  
ABIERTO  
Y TRANSPARENTE**



EL SENADO EN LAS REGIONES:

► **FORO** - DICIEMBRE 27 DE 2016 ◀

**FAST TRACK**  
**¿QUÉ VIENE PARA LA PAZ?**

► **BOGOTÁ D.C.** ◀



C i c l o d e  
**FOROS REGIONALES**  
SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



## **¿Qué viene para la paz?**

Fast track y ley de amnistía  
Foros Regionales  
Senado de la República

Documento elaborado como consultoría

Diego Andrés Quintero Sánchez  
M.A. Gobierno y Políticas Públicas  
dbrunoq@gmail.com

Bogotá D.C. julio de 2017



# Contenido

<b>Introducción</b>	<b>4</b>
<b>Contexto</b>	<b>6</b>
<b>Foros Regionales</b>	
<b>Senado de la República de Colombia</b>	<b>9</b>
<b>Primer panel: “Iniciativas para la paz, trámite especial”</b>	<b>9</b>
Intervención del señor ministro de Justicia y del Derecho: Jorge Eduardo Londoño Ulloa	10
Intervención del señor senador: Eduardo Enríquez Maya:	12
Intervención del señor representante del Movimiento Voces de Paz y Reconciliación: Jairo Estrada	13
Intervención del señor secretario de la Comisión Primera del Senado de la República: Guillermo Giraldo	14
Intervención del señor senador de la República: Roy Barreras	15
<b>Segundo panel: “Proyecto de Ley de Amnistía”</b>	<b>16</b>
Intervención del señor senador: Horacio Serpa Uribe	16
Intervención del señor ministro del Interior: Juan Fernando Cristo	17
Intervención del señor senador: Armando Benedetti	18
Intervención del señor representante a la Cámara: Germán Navas Talero	18
Intervención del Señor Representante de la Organización Voces de Paz en el Senado de la República: Pablo Cruz	19
Intervención del señor senador de la República: José Obdulio Gaviria	19
Réplica - Intervención del señor ministro del Interior: Juan Fernando Cristo	20
<b>Participación de los ciudadanos</b>	<b>21</b>
<b>Análisis:</b>	<b>22</b>
Fast – Track	23
Proyecto de Ley de Amnistía	24
<b>Referencias</b>	<b>26</b>



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
SENADO DE LA REPÚBLICA



# Introducción



En el marco de la implementación del Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente, la Presidencia del Senado de la República ha tomado la iniciativa y suscribió el compromiso de promover espacios regionales que permitan acercar el Senado de la República a los departamentos.; El objetivo de estos espacios es aproximar a los senadores a las regiones con el propósito de debatir temáticas de interés para los territorios y darle a conocer a la ciudadanía las medidas que se están desarrollando en estos temas. Estos espacios se han denominado foros regionales y vienen realizándose exitosamente desde agosto de 2016.

Lo foros regionales han sido concebidos, desde su definición, como la posibilidad de ser una extensión del control político que el Congreso ejerce sobre el poder ejecutivo. Por supuesto se entiende que el ejecutivo no tendría la obligación legal de acudir a estos espacios, sin embargo esta actuación acerca a los poderes públicos con la ciudadanía y permite su interacción, potenciando la legitimidad en el ejercicio de la función pública en las regiones.

Si bien, el foro no es un escenario formal de control político, si es propicio para el control social, dado que con el Congreso como articulador, la ciudadanía acude y participa; además de conocer la gestión tanto del ejecutivo y del legislativo sobre los temas más relevantes en su región, tiene la posibilidad de interactuar directamente con las autoridades nacionales, regionales y locales para manifestar sus inquietudes y proponer alternativas en la solución de sus más sentidos problemas.

En este contexto, el 27 de diciembre de 2016 se realizó en Bogotá D.C., el Foro Regional que tuvo como tema central el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, conocido mediáticamente como “Fast track”. Este procedimiento se encuentra definido en el acto legislativo N° 01 del 7 de julio de 2016 por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El Foro Regional se desarrolló en dos paneles, el primero se refirió al trámite especial de iniciativas legislativas para la paz y contó con la presencia del señor ministro de justicia y del derecho: Jorge Eduardo Londoño Ulloa, el senador Eduardo Enríquez Maya, el profesor Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento Voces de Paz y Reconciliación; y finalmente el secretario de la Comisión Primera del Senado de la República: Guillermo León Giraldo.

El segundo panel se centró en el proyecto de Ley de Amnistía y contó con la participación de los senadores Carlos Fernando Moota, Horacio Serpa Uribe, Armando Benedetti, José Obdulio Gaviria; el ministro del interior, Juan Fernando Cristo; el representante a la Cámara, Germán Navas Talero y el vocero de la organización Voces de Paz, Pablo Cruz.

Este documento recoge las posturas de los participantes en el foro y finalmente propone un análisis de política pública que espera convertirse en herramienta de consulta útil para el desarrollo del trabajo legislativo.



# Contexto



El fast track es el procedimiento rápido para el ejercicio legislativo, que se acordó entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, como el mecanismo especial que serviría para adoptar las reformas institucionales necesarias en la implementación del Acuerdo Final.

Lo primero que hay que decir es que el fast track es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce el número de debates -en el Congreso- requeridos para la aprobación de leyes y reformas constitucionales; y de esta manera aterrizar el acuerdo de paz que el Gobierno firmó con las FARC. (Revista Semana, 2016).

EL Acto Legislativo 01 de 2016 por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, nace en el contexto de la negociación con las FARC, teniendo en cuenta que ya existían acuerdos en tres de los cinco puntos propuestos en el Acuerdo General (2012) y como una necesidad autónoma del Estado de brindar seguridad jurídica al proceso de paz, además de haber reconocido la importancia de implementar lo acordado de manera ágil al comprender este como un factor de éxito en otras experiencias de procesos de paz.

Es en el marco de este Acto legislativo que se crea el mecanismo legislativo especial y transitorio, para el que la misma Corte Constitucional reconoce que tiene como objetivo lograr la paz como un fin imperioso del orden constitucional, y que a la vez conserva su integridad y no lo sustituye ( Sentencia C-699, 2016).

El mecanismo legislativo especial es de carácter transitorio y establece la manera en que deben aprobarse las leyes y los actos legislativos en desarrollo del Acuerdo Final que se firmó con las FARC, el 24 de noviembre de 2016, allí se establece:

- La iniciativa de los proyectos de Ley y de acto legislativo, será exclusiva del Gobierno Nacional.
- El contenido de los PL y de AL tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto
- Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial
- El primer debate de los proyectos de ley se surtirá en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales Permanentes respectivas, sin que medie para ello solicitud del Gobierno nacional. El segundo debate en las plenarias de cada una de las Cámaras;
- Los proyectos de ley serán aprobados con las mayorías previstas en la Constitución y la ley, según su naturaleza;
- Los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de 8 días.
- Los proyectos de acto legislativo serán aprobados por mayoría absoluta;
- Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno nacional;
- En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación.
- Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. Las Leyes Estatutarias tendrán control previo, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión para leyes y actos legislativos se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados.



Adicionalmente establece, de manera transitoria, facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley para facilitar y asegurar la implementación del desarrollo normativo del acuerdo final.

Se incluye un Plan de Inversiones para la paz por 20 años como un componente específico del Plan Plurianual de Inversiones. En síntesis se redujo de 8 a 4 debates y de 2 a 1 vuelta en el Congreso de la República, para aprobar Actos legislativos.

Al final de la legislatura 2016- 2017, después del acuerdo de paz, se tiene que se han aprobado en el Congreso tres actos legislativos y tres leyes, los cuales esperan el aval de la Corte Constitucional. Así mismo el Presidente de la República, con facultades especiales, ha expedido 35 decretos ley.

Para la segunda legislatura se debe considerar que las facultades extraordinarias al Presidente de la República terminaron el 29 de mayo. Por efecto de la Sentencia C332 de 2017, ya no es obligatorio que el Congreso vote en bloque los proyectos de normas y finalmente los congresistas pueden incluir modificaciones a los proyectos de Ley sin contar con el aval del Gobierno Nacional.

Se mantiene que este procedimiento rápido no puede ser utilizado para tramitar proyectos de Ley, que no estén relacionados con el desarrollo del Acuerdo Final.

A continuación se presentan las intervenciones de los asistentes al foro.



# Foros Regionales Senado de Colombia



# Primer panel: Iniciativas para la paz, trámite especial



Intervención  
**MAURICIO LIZCANO ARANGO**  
presidente del Congreso



Intervención  
**JORGE EDUARDO LONDOÑO U.**  
ministro de Justicia y del Derecho:

La introducción al primer panel la llevó a cabo el Presidente del Congreso de la República, senador Mauricio Lizcano, quien empezó reconociendo las múltiples interpretaciones sobre el inicio del conflicto armado en Colombia, pero resaltó el hecho histórico que representa el comienzo del fin del conflicto con la firma del acuerdo de paz celebrado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Así mismo destacó el papel fundamental que tiene el poder legislativo en la implementación de este acuerdo a partir de sus capacidades definidas en la ley, no como “un convidado de piedra”, sino con un rol protagónico esencial que, además de discutir los acuerdos, propone mejoras necesarias como las que se realizaron en la Comisión Primera al proyecto de ley de amnistía.

Así se muestra que el Congreso de la República asume el reto de alcanzar, a través de los consensos, el mejor camino para la implementación del acuerdo de paz y dar espacio al inicio del posconflicto.

Antes de dar inicio a la discusión sobre el Procedimiento Legislativo Especial (fast track), el señor Ministro, hace algunas precisiones conceptuales:

La justicia transicional es un sistema que se aplica para la terminación de los conflictos y es una ponderación entre la paz y la justicia. La tradición positivista colombiana dificulta pensar en un escenario de justicia (procedimientos y normas) basado en principios y valores más que en un derecho positivo puro. Existe la tendencia a creer que la justicia transicional no es problema político, sino un problema jurídico. Lo que se ha pensado como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un sistema integrado en donde la importancia no está en la pena, en llevar a las personas a la cárcel para que allí terminen su existencia; por el contrario se busca que primen otros valores. Los colombianos necesitamos conocer la verdad y la reparación a las víctimas, para lo cual se necesita dicha consecución de la verdad. Este sistema integral de justicia tiene sustancialmente una comisión de la verdad que estará encargada de hacer esta búsqueda; tiene también una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tiene una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y tiene muy en cuenta la reparación a esas víctimas.

La discusión tradicional en temas de Justicia siempre se desvió a la pena y a pagar cárcel; este no es el núcleo del problema. Lo importante es que los colombianos, a través de la verdad, podamos construir otro imaginario colectivo, en el que primen otros valores y principios que nos ayuden a reencontrarnos como sociedad; lo cual no es posible alcanzar a partir de métodos y concepciones tradicionales.

Un aspecto fundamental en esta re conceptualización de la justicia, es el perdón y se cita una frase, que llegó en los debates sobre amnistía, en el que una de las víctimas afirmó: “nosotros necesitamos saber quiénes son nuestros victimarios, no para colgarlos en la Plaza de Bolívar, sino para perdonarlos”. Las discusiones en un proceso de paz deben girar en torno al perdón y la necesidad de espacios no tradicionales de la Justicia y no en torno a lo netamente jurídico. El Estado de Derecho toma sentido en tanto le incluimos la consecución de principios y valores como bienes fundamentales, de lo contrario este Estado carece de sentido.

Se diseñó entonces un procedimiento rápido que busca que los acuerdos se implementen en el menor tiempo posible, porque en la historia, comparando los diferentes conflictos, se ha visto que aquellos en los que se ha demorado la implementación de los acuerdos de paz, son procesos que han fracasado.

Se ejemplifica con el caso de Angola en donde el primer año se había implementado solamente el 1,85% de esos acuerdos y en el quinto año se llegó al 53%; en India en el primer año la implementación fue del 23,5% y en el año décimo se alcanzó también el 50%. Estos fueron procesos que fracasaron. Por el contrario, en procesos como los de Bosnia, Salvador e Irlanda del Norte, considerados exitosos; desde el primer año para el caso de Bosnia, se había implementado el 72% de los acuerdos, en salvador el 52% y en Irlanda del Norte en el primer año se implementaron el 100% de las reformas constitucionales.

La implementación de estos acuerdos no se puede dilatar en el tiempo teniendo en cuenta que esto produ-

ciría deterioro en la confianza entre las partes negociadoras; la dilación implica también problemas de logística y administrativos, pero sobre todo puede afectar o hasta podría terminar con el proceso de paz. Esto explica y justifica la definición de este procedimiento rápido, reconociendo que está cuidadosamente elaborado, si se tiene en cuenta que en él participan: el poder ejecutivo que define los proyectos; el poder legislativo que los discute y los aprueba; y adicionalmente participa el poder judicial a través del control de constitucionalidad automático y único, que se le hará a todos los proyectos de leyes ordinarias, actos legislativos o leyes estatutarias; aprobados en el legislativo.

Las características fundamentales del Procedimiento Rápido son tres; primero tiene una duración limitada de seis meses contados a partir del momento en que se sancionó la Ley (Acto legislativo 01 de 7 de julio de 2016) y que puede ser prorrogado por otros seis meses. Este sería entonces también un procedimiento de transición de la misma manera que lo es la Justicia Transicional. La segunda característica hace referencia a la limitación de los temas, si bien la iniciativa es del Ejecutivo, sólo puede referirse a materias específicas relacionadas con el proceso de paz. El Presidente, en uso de sus facultades, no podrá proponer decretos ley que no estén relacionados con los acuerdos de paz que se han firmado. Adicionalmente las discusiones en el legislativo tienen un carácter preferencial, lo que significa que deben ser incluidos en primer lugar en el orden del día. Las modificaciones que se incluyan en las discusiones en el Congreso, deben ser avaladas por el Ejecutivo que debe garantizar su correspondencia con los acuerdos firmados.

La tercera característica hace referencia al control posterior, automático y único de constitucionalidad. Así las cosas, se confirma este procedimiento como de transición que busca aligerar la implementación.

Es vital que las reformas Constitucionales y legales se implementen rápidamente, posibilitando que los aspectos logísticos y administrativos puedan llevarse a cabo de manera expedita.



Intervención  
**EDUARDO ENRÍQUEZ MAYA**  
H. senador de la República

La intervención del senador habla específicamente sobre uno de los proyectos de ley que se tramitará en el Congreso con motivo del proceso de paz con las FARC, el que corresponde al Estatuto de la Oposición.

La oposición debe ser entendida como una especie de órgano de la democracia; después de tantos años de vida republicana en Colombia, la oposición sigue siendo una asignatura pendiente en la institucionalidad del país. La oposición solo se encuentra en la Constitución Política en su artículo 112.

Se propone una enmienda constitucional que permita que los segundos en votos en las elecciones al poder ejecutivo, puedan asumir automáticamente un escaño en el Senado en el caso del candidato a Presidente y un escaño a la Cámara de Representantes para el candidato a Vicepresidente; un escaño en la Asamblea departamental en las elecciones a Gobernador y un escaño en el Concejo municipal para las elecciones a la Alcaldía. Esta enmienda tiene una aclaración y es que sólo se aumentan dos curules, una en el Senado y otra en la Cámara de Representantes, pero en ningún caso se crean curules nuevas en las Asambleas departamentales o Concejos municipales.

Otras reformas constitucionales que se han implementado para aumentar las garantías al Derecho de Oposición, tienen que ver con la elección de personeros municipales por concurso de méritos, de la misma manera se incluyó este criterio meritocrático para la elección del Registrador Nacional del estado civil.

En cuanto al mecanismo de control político por parte del Congreso sobre el Gobierno Nacional, se han introducido recientemente cambios constitucionales que implican la ampliación de esta capacidad, además de ministros, a superintendentes y directores de departamentos administrativos; así mismo se permitió con esta reforma que las mociones de censura a los diferentes funcionarios del Estado se hagan con independencia entre la cámaras del Congreso; esto quiere decir que el Senado puede pronunciarse censurando a un funcionario y la Cámara puede guardar silencio frente al mismo caso, o viceversa, manteniendo el efecto de la moción sobre el funcionario censurado por el legislativo.

El estatuto tendrá entonces la finalidad de fortalecer a los partidos políticos, bien sea en el gobierno o en la oposición, para el beneficio de la democracia.

La segunda reforma propuesta trata sobre mantener la prohibición de la reelección presidencial, pero abriendo la puerta para que esta reelección se de únicamente por iniciativa popular, esto es por decisión del constituyente primario y no por decisión del legislativo.

Sobre el procedimiento rápido, el senador Enríquez Maya considera que limitar la acción pública de constitucionalidad no había sido contemplado en la institucionalidad en más de 100 años de vida republicana, pero considera también razonable que esto se haga en tanto beneficia la celeridad en la implementación de los acuerdos de paz y se conserva la garantía constitucional con el control posterior que hará la Corte Constitucional.



Intervención  
**JAIRO ESTRADA**  
representante del Movimiento  
Voces de Paz y Reconciliación

La intervención comienza por describir los propósitos fundamentales de Voces de Paz: contribuir a hacer veeduría política y social al proceso de implementación normativa de los acuerdos de paz en el Congreso y aportar en el proceso de alistamiento en el tránsito de las FARC como partido político legal.

El acuerdo de paz es motor de reformas políticas aplazadas, un ejemplo es el estatuto de oposición. Fue necesario un acuerdo con las guerrillas para que estas reformas tengan lugar.

Las reformas sobre las que se hace referencia en esta intervención se refieren a aquellas para las que su trámite se hará a través del Fast-track y se relacionan específicamente con dos aspectos, el primero tiene que ver con el tránsito y reincorporación de las guerrillas a la vida civil y otras reformas que profundizan la democracia en Colombia.

La ley de amnistía se propone como un paso necesario que permita la concentración de combatientes de las FARC en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y dará inicio a la dejación de armas. Esta ley de amnistía tiene un alcance significativo y prioritario definido en el marco de la negociación en La Habana.

Otros procedimientos prioritarios tienen que ver con la aprobación del Acto Legislativo por el cual se constituye la Jurisdicción Especial para la Paz; y el Acto Legislativo por el cual se da inicio a la reintegración de las FARC a la política. Otro acto legislativo importante es aquel por

el cual se prohíbe constitucionalmente el paramilitarismo, con su posterior desarrollo legislativo para combatir estas estructuras criminales.

Así mismo, la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con ocasión del conflicto o el Estatuto de Oposición y la Reforma al Sistema Electoral, son desarrollos necesarios que deben tramitarse a través del mecanismo de fast track y que tienen el alcance de transformar significativamente la política en el país.

Como consecuencia también del Acuerdo Final se abrirá un ciclo histórico de esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto, que tiene dos ejes, el ya mencionado de la JEP y la creación de la Comisión de esclarecimiento de la Verdad. Los tiempos por venir son de profundas reformas políticas y sociales, pero también de acercamiento a la historia. No es posible construir futuro en un país sin esclarecer lo que ha sucedido.

Para que los acuerdos realmente se implementen, no basta con los desarrollos normativos mencionados anteriormente, se hace necesario que se dispongan los recursos en los próximos planes de desarrollo y que exista una apropiación social de los acuerdos a través de la participación ciudadana.

El procedimiento rápido es solo un mecanismo que garantiza el cumplimiento efectivo de los acuerdos. Los cambios sociales que se promueven a través de la implementación de los acuerdos son posibles en el marco de la desmovilización y reintegración de las guerrillas.



Intervención  
**GUILLERMO GIRALDO**  
secretario Comisión I del Senado

Esta intervención corresponde a la descripción detallada del procedimiento legislativo especial, haciendo un recorrido por las normas que tramitará el Congreso a través de dicho procedimiento.

Se hace la precisión sobre aquellos tipos normativos que están fuera de las facultades concedidas al Presidente de la República a través del Acto Legislativo 01 de 2016, las facultades no podrán ser utilizadas para expedir: actos legislativos, leyes estatutarias, leyes código, o leyes que necesiten mayoría calificada o absoluta para su aprobación y tampoco se podrá decretar impuestos.

	Proyecto de Ley	Acto Legislativo
<b>Iniciativa - Radicación</b>	Solo el gobierno puede presentar proyectos - Debe ser publicado en la Gaceta. Para lo no establecido en este proceso legislativo especial para la paz, se aplicará el reglamento del Congreso de la República.	
<b>Discusiones - Debates</b>	El proyecto se reparte en comisiones, a la comisión respectiva de acuerdo con ley 974 de 2005. Comisiones Conjuntas de Cámara y Senado. La votación la hace cada comisión separadamente.	Cada Comisión se reúne y debate el Acto Legislativo
<b>Plenaria</b>	Se aprueba en cada una de las plenarias de las 2 cámaras. Trámite especial o mensaje de insistencia, tendrá prelación en el orden del día, sobre cualquier otro asunto.	
<b>Traslado a Cámara</b>	Si es proyecto de ley se designa ponente en comisiones de cada cámara, las comisiones deberán sesionar conjuntamente. No se puede votar artículo por artículo, se vota todo el proyecto de ley.	Cada comisión vota por separado la norma en discusión. 8 días la discusión entre una Cámara y otra
<b>Sanción Presidencial</b>	Es anterior al control constitucional para las leyes ordinarias y posterior para leyes estatutarias.	No tiene sanción presidencial
<b>Control de constitucionalidad</b>	El control Constitucional es único e inmediato y se hace sobre el fondo, sobre el contenido de la Ley y no solo sobre su trámite. Si se trata de una ley estatutaria el control constitucional se hará anterior a la sanción presidencial.	Solo se hace control Constitucional sobre los procedimientos, sobre posibles vicios de forma.



Intervención  
**ROY BARRERAS**  
H. senador de la República

Este proceso de paz ha sido necesario para poner fin a 52 años de guerra con lo que eso implica en términos de vidas humanas que se ha evitado perder o sacrificar.

El fin de la guerra es un objetivo que no se puede perder. El Fast track, permite entregar seguridad jurídica a los combatientes que se desmovilizan a partir de aprobación de leyes como la Ley de amnistía. En este sentido es indispensable para que la paz se consolide.

El senador propone una discusión global sobre la guerra y la paz como un derecho y acción humana reparadora fundamental. El mundo ha reconocido la importancia de la paz en Colombia y necesita saber que es posible terminar una guerra en algún lugar del planeta. El proce-

so de paz en Colombia es un ejemplo para otros conflictos en el mundo y en esa medida existe la obligación moral de construir un ejemplo posible y real de un acuerdo de paz, de la finalización de un conflicto armado.

Se espera entonces encontrar elementos comunes con quienes se oponen al proceso de paz, que permitan fortalecer la legitimidad del acuerdo; en esta búsqueda se encuentra que para las diferentes fuerzas políticas con representación en el Congreso de la República, la amnistía es necesaria y útil; por tanto es un tema propicio para buscar acercamientos y generar unanimidad frente a los acuerdos y frente a los diferentes actores del conflicto, especialmente frente a las Fuerzas Armadas; para que comprendan que los acuerdos también les son útiles y son buenos para ellos y sus familias. La amnistía es entonces un escenario de consenso con la oposición al proceso de paz, especialmente con el Centro Democrático.

# Segundo panel: Proyecto de Ley de Amnistía



Intervención  
**CARLOS FERNANDO MOTOA**  
H. senador de la República

La introducción a este segundo panel se encuentra a cargo del señor senador Carlos Fernando Motoa quien resalta la importancia del Fast track, para la implementación expedita de los acuerdos de paz y menciona los proyectos de ley y de acto legislativo que debe estudiar el Congreso de la República entre los que se destacan temas como:

La inclusión de los voceros de las FARC y su reconocimiento en la ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso); la amnistía e indulto con los tratamientos penales especiales para combatientes, incorporación del sistema integral de justicia, reparación y no repetición; el desarrollo de un marco constitucional para el tratamiento diferenciado de los agentes del Estado; garantía de blindaje de reformas constitucionales y legales para los próximos tres periodos presidenciales que den estabilidad al acuerdo de paz; tratamiento penal diferenciado para cultivadores de coca y finalmente las condiciones de ampliación de la participación política y ciudadana con garantías para opositores que ponga fin a la posibilidad de hacer política a través de las armas como una opción legítima. En general son más de 25 iniciativas legislativas que deben adelantarse como desarrollo de

los acuerdos de paz con las FARC, para lo cual el Congreso ha manifestado su voluntad para llevar a cabo esta tarea.



Intervención  
**HORACIO SERPA URIBE**  
H. senador de la República

La intervención del Senador pretende explicar desde el reconocimiento en la tradición constitucional colombiana del delito político, su conexidad con otros delitos y la posibilidad de otorgar amnistía o indulto para estos.

La Constitución de 1991, al incluir en su texto el reconocimiento del delito político, supone la posibilidad de reconocer cierto grado de legitimidad a una insurgencia o postura política contraria a su ordenamiento. Si bien califica la conducta como un delito, reconoce en cierta medida que la comisión de ese delito persigue un interés general.

Las implicaciones del reconocimiento del delito político es que se le otorga un tratamiento benigno en la legislación penal. De acuerdo con esta argumentación, acciones de insurgentes pueden ser asociadas a objetivos de interés o bien común.

Esta asociación es lo que permite al Gobierno, en la negociación, reconocer a las FARC su status político.

Al reconocer la naturaleza política de las organizaciones subversivas se plantea el debate sobre la conexidad de delitos cometidos en el contexto de la insurrección o insurgencia con el delito político.

Solo bajo la comprensión de que el delito de rebeldía está relacionado con otros delitos, puede entregarse indulto o amnistía.

Entender la génesis del delito político en nuestra tradición constitucional es fundamental para hacer el tránsito a entender la conexidad con otros delitos.



Intervención  
**JUAN FERNANDO CRISTO**  
ministro del Interior

La intervención del Ministro toca aspectos fundamentales sobre el acuerdo de paz y particularmente la promulgación de la Ley de Amnistía en tanto se refiere a la posibilidad de establecer conexidad entre el delito de narcotráfico y el de rebelión, aclarando que serán los jueces de la JEP los únicos que pueden establecer esta conexidad de acuerdo con cada caso particular.

El juez determinará cuándo esta actividad del narcotráfico se desarrolló para el enriquecimiento personal y no podría considerarse como conexa con la rebelión. Es

muy importante aclarar que dentro del texto de los acuerdos ya quedó claramente definido que en las decisiones de los jueces de la JEP se tendrá en cuenta la jurisprudencia existente sobre el tema.

Avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, incluida la ley de amnistía, implica el reconocimiento de la importancia de poner fin a la guerra. Igualmente importante es el compromiso, acompañamiento y participación activa de la ciudadanía en la implementación de dichos acuerdos.

La oposición política al gobierno ha sabido vincularse a la aprobación de los acuerdos de paz y la preparación del camino para la implementación, a través de la promulgación de leyes necesarias como la del marco jurídico para la paz, la ley de víctimas o la de restitución de tierras, etc. En este sentido, se hace explícita y reiterada la invitación al partido Centro Democrático para vincularse al proceso de paz sin dejar la oposición, pero con un sentido más constructivo.

El Senador hace referencia también al Fast track, argumentando que el Congreso no es sólo un convidado de piedra a la aprobación de los acuerdos; y esto ya ha sido demostrado dado que las discusiones en el Congreso introducen cambios pertinentes y necesarios, aún en los textos que ya hacían parte de los acuerdos firmados. El Acto Legislativo que permite el Fast track no sustituye la Constitución dado que ya fue aprobado por la Honorable Corte Constitucional, adicionalmente su carácter es transitorio y propende por la garantía del derecho fundamental a la Paz.

Finalmente termina su intervención haciendo una mención, en relación con la necesidad del Fast track, afirmando que lo que no se realiza durante el primer año de implementación, dificulta la materialización de los acuerdos en el futuro. La velocidad en la implementación de los acuerdos de paz es, históricamente demostrado, directamente proporcional al éxito en los acuerdos.



Intervención  
**ARMANDO BENEDETTI**  
H. senador de la República

La intervención del senador Benedetti inicia con una reflexión sobre la coincidencia etimológica entre la palabra amnistía y la palabra amnesia, para encontrar una justificación legítima para que la amnistía y el indulto tengan lugar en el marco del proceso de paz. Estos serían entonces, una necesidad de olvido de un pasado insoportable. No se trata de hacer una fuga a lo ocurrido, se trata de organizar la memoria para saber que lo ocurrido fue verdadero y es insoportable. Se trata entonces de un olvido sobre el cual se construya un nuevo consenso y es allí donde la amnistía y el indulto juegan un papel fundamental.

Siguiendo con el argumento, el nuevo consenso llevaría a crear un nuevo Estado con base en que existe la paz y dicho Estado puede encaminar sus esfuerzos a situaciones y necesidades diferentes a la guerra. Esta es la única ley literalmente inscrita en los acuerdos; la ley que conlleva a que 4000 hombres bajen del monte, dejen sus armas y se reintegren a la sociedad; siendo este un hecho sublime y que contribuye significativamente para alcanzar la paz en el país.



Intervención  
**GERMÁN NAVAS TALERO**  
H. Representante a la Cámara

Con una postura de partido, se afirma que el Polo Democrático acompaña y apoya todas y cada una de las acciones necesarias para alcanzar la paz; si bien es cierto, el partido se encuentra en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, no se opondrá jamás al establecimiento de la paz. La amnistía y el indulto se oponen a las visiones que buscan venganza; por su parte el Polo Democrático apoyará y votará favorablemente esta ley, facilitando la implementación de los acuerdos de paz.

Esta decisión parte del principio de reconocer la rebelión como un deber de quienes consideran que están enfrentados a un estado ilegítimo y que adicionalmente buscan la garantía de lo que ellos consideran un derecho.

En este orden de ideas se brindará apoyo, también, a las iniciativas de considerar el narcotráfico como un delito conexo con el delito político, al entender que la rebelión se hace por la fuerza, y la movilización de la fuerza armada en rebelión necesita de financiación, y los recursos obtenidos por vía de narcotráfico no se destinan a enriquecer al cabecilla, sino a la promoción de una causa política.



Intervención  
**PABLO CRUZ**  
representante de Voces de Paz  
y Reconciliación en el Senado

La primera consideración hace referencia al delito político y al delincuente político como un hecho presente en la historia de las sociedades humanas y está presente en todas las legislaciones con un tratamiento diferenciado. Esto sucede justamente porque existe, desde las sociedades, el reconocimiento de las motivaciones del delincuente político. En el delincuente político no existe la aspiración del beneficio particular, no existe la aspiración de resolver sus problemas familiares, el delincuente político aspira a la construcción de una sociedad mejor. Colombia ha sido un país en el que se han concedido amnistías desde la Constitución de la República hasta su historia reciente con el proceso de paz con los paramilitares.

Esta amnistía se entiende como necesaria para poner fin a la práctica de utilización de las armas para defender opiniones y programas políticos. La insurgencia fue una respuesta al modelo del Frente Nacional como realidad sectaria y excluyente que negaba la participación de opciones políticas diferentes a las gobernantes.

Enfrentar a un Estado desde la disidencia política implica el despliegue de recursos para garantizar el desarrollo logístico y militar que permita mantener la confrontación en el tiempo; para ello la insurgencia incurre en delitos manteniendo como finalidad una causa colectiva, cuando los delitos se cometen en beneficio particular, existe en las normas internas de la organización (FARC) una sanción disciplinaria severa para aquellos integrantes que empleen los métodos y recursos de la organización para el beneficio particular.

Para establecer el límite de hasta dónde va a llegar la Verdad desde el punto de vista de la guerrilla en el

proceso de paz, se debe tener en cuenta que los acuerdos definen unas condiciones mínimas de verdad para acceder a los beneficios del indulto y quien no cumpla con los compromisos de ofrecer verdad, reparación a las víctimas y no repetición, perderá los beneficios que ofrece la Jurisdicción Especial de Paz. Es importante resaltar que estas condiciones espaciales de paz están abiertas para todos los actores del conflicto incluyendo a los militares.

Desde el movimiento Voces de Paz se extiende la garantía y el compromiso de las FARC con los valores de verdad, justicia, reparación y no repetición y se espera que la contraparte en el Estado o la sociedad, manifieste también un compromiso real en este sentido.



Intervención  
**JOSÉ OBDULIO GAVIRIA**  
H. senador de la República

En la legislación colombiana se han producido diversos referentes sobre el tema de amnistías e indultos, la más significativa desde el punto de vista conceptual es la Ley 733 de 2002, que prohíbe la amnistía para los delitos de terrorismo y secuestro fundamentalmente.

El artículo 22 del proyecto de ley de amnistía considera que todos los delitos comunes cometidos por los miembros de las FARC pueden ser considerados delitos conexos con el delito de rebelión. Este mismo artículo incluye como un criterio de interpretación que todos los delitos cometidos con el objeto de financiar la actividad rebelde son delitos conexos.

Teniendo en cuenta los objetivos de las FARC en la negociación que se refieren a no ir a la cárcel y alcanzar

elegibilidad política, se plantean a partir del artículo 22, enormes problemas en materia jurídica.

Si se tienen en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional en las que se expone la jurisprudencia para limitar los delitos susceptibles de indulto y amnistía; el senador afirma que la definición sobre la conexidad de los delitos, con el delito de rebelión no está sujeta a interpretación por parte de la comisión especial de paz, y que estos delitos ya están limitados por la jurisprudencia de la corte y en cualquier caso por la justicia internacional.

Citando la Sentencia C-695 de 2002, advierte que los delitos como el secuestro (delito representativo en el actuar de las FARC), no son objeto de indulto o amnistía y que esto no está sujeto a la interpretación de la JEP. En este sentido, el senador Gaviria afirma que la impunidad que está dispuesta a aceptar el Centro Democrático, como partido, es la impunidad propia del delito de rebelión y los delitos conexos; es decir excluye cualquier delito de lesa humanidad, cualquier crimen de guerra y por supuesto también excluye el narcotráfico.



Réplica - Intervención  
**JUAN FERNANDO CRISTO**  
ministro del Interior

El señor ministro considera que existe una equivocación en la intervención del senador Gaviria dado que la fiscal de la Corte Penal Internacional y el vice fiscal adjunto de esta misma corte, al evaluar el Acuerdo y la Ley de Amnistía incluida en el texto, señalaron su conformidad con los principios generales e hicieron observaciones acerca del monitoreo y control a las obligaciones adquiridas por las FARC.

Sucede también que se está confundiendo Amnistía e Indulto con las Penas Alternativas y en esto es indispensable arrojar claridad para no confundir a la opinión. El proyecto de ley de amnistía, excluye expresamente la posibilidad de amnistía e indulto para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Ahí no existe ninguna duda.

Sin embargo, cuando se acuda al Tribunal de Paz en sus distintas salas; los integrantes de las FARC, que estén siendo investigados o condenados por estos delitos de lesa humanidad, deben esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la no repetición para acceder a la pena alternativa que está establecida en los acuerdos, esto es 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad.

Esta restricción efectiva de la libertad fue modificada y ajustada de acuerdo con las solicitudes y aportes de los ciudadanos que apoyaron el NO en el plebiscito del 02 de octubre de 2016.

Este proyecto de ley se ajusta a la Justicia Internacional de acuerdo con la Corte Penal Internacional, lo cual aleja el fantasma de una eventual intervención de esta corte en el futuro.

Frente a la necesidad de establecer diferenciación entre los combatientes de las FARC y los combatientes pertenecientes a las FFMM, se afirma que frente a la justicia se les dará un tratamiento equitativo, evitando errores pasados en los que se indultó a combatientes de la insurgencia, pero se aplicó todo el peso de la ley a combatientes de las FFMM que en ejercicio de sus funciones habían cometido delitos. Este proceso de paz ha contado con el acompañamiento de las Fuerzas Militares y ha permitido que la justicia transicional se aplique también a los miembros de la Fuerza Pública en la medida en que ofrece beneficios para aquellos que cometieron delitos menores y que al ofrecer verdad le serán amnistiados, así mismo las penas por delitos que no sean de lesa humanidad podrán ser indultadas.



Intervención  
**CIUDADANOS**  
Bogotá D.C.

Uno de los objetivos del presente documento, orienta a dar cuenta de las intervenciones ciudadanas en cada uno de los paneles del Foro Regional; es así como se recogen los puntos de vista de la sociedad civil, que se consideran relevantes para la discusión del fast track en general y particularmente sobre el proyecto de Ley de Amnistía.

Sobre el proceso de paz, la ciudadanía expresó en el Foro su preocupación por el cumplimiento de los principios de verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. En general se puede afirmar que los ciudadanos expresan sus inquietudes en términos de Justicia e Impunidad. El Procedimiento Legislativo Especial no es considerado por la ciudadanía en su componente procedimental o técnico. Sin embargo manifiestan inquietudes sobre la efectividad del proceso de paz para detener la violencia que les afecta, así como la necesidad de que el Estado haga presencia efectiva en el territorio de tal manera que se garanticen los derechos y las libertades ciudadanas. Se considera que la presencia estatal debe trascender la coerción y garantizar bienes y servicios públicos esenciales. Así mismo, manifiestan que el Estado debe copar los territorios en los que el poder

local era ejercido por grupos al margen de la ley para restablecer la institucionalidad con las características mencionadas.

El cuestionamiento más importante, por parte de los ciudadanos, frente a la ausencia estatal en el posconflicto que dificulte que la paz se mantenga en el tiempo, se refiere a la continuidad en la práctica de homicidios selectivos a líderes sociales, para lo cual el Estado no ha tenido, históricamente, la capacidad de responder satisfactoriamente; ofreciendo respuestas y sometiendo a los responsables a la justicia.

Una experiencia significativa desde la sociedad civil la representa la iniciativa “Ojo con la Paz”, como una veeduría ciudadana que le hace seguimiento a la implementación de los acuerdos. Ojo con la Paz es un grupo de ciudadanos que se toma en serio y exige su derecho a participar para ayudar a garantizar que se cumplan de la mejor manera posible. Adicionalmente esperan constituirse en un puente entre las instituciones y la sociedad civil para informar sobre estos avances en la implementación.



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
SENADO DE LA REPÚBLICA



# Análisis



# Fast – Track

Desde la sociedad civil, pero no como asistentes al foro, se levantan posturas calificadas que es importante documentar en este ejercicio dado el alcance que se espera del mismo. Frente a la refrendación de los acuerdos se resalta que el Fast – Track es un mecanismo necesario sin el cual la implementación del acuerdo será lenta y difícil, reconociendo la importancia de la velocidad en la implementación y su relación con el éxito de los procesos de paz que se ha resaltado anteriormente. Sin embargo “sin un acuerdo nacional o alguna forma de legitimación popular directa del acuerdo, muchos ciudadanos, movilizados por los voceros más radicales del No, podrán llegar a creer que mediante la refrendación puramente congresional la clase política elude los efectos del plebiscito y distorsiona una decisión popular. Y no es claro tampoco que la refrendación congresional pueda ser entendida como la “refrendación popular” que permita activar el acto legislativo No 1 de 2016 sobre el llamado “fast track”” (Uprimny, 2016).

A la fecha en que fue escrita la citada columna de opinión, la Corte Constitucional<sup>1</sup> no se había pronunciado sobre la viabilidad de aprobación del Fast track por vía congresional, sin embargo, al ser esta una realidad, sigue vigente la inquietud de la falta de legitimidad en la implementación del acuerdo, dada la condición de activación del mecanismo legislativo especial a partir de refrendación popular directa. A pesar de que el nuevo acuerdo de paz incorpora la mayoría de las objeciones hechas al acuerdo inicial por parte de los voceros del NO, ganadores en el plebiscito por una pequeña y poco significativa mayoría; la tesis de la necesaria refrendación popular puede seguir vigente si los opositores al proceso de paz no reconocen la legalidad de estas medidas e introducen inestabilidad en el proceso de paz en el mediano o largo plazo. Se abre paso entonces a la política, en donde se espera que el avance en la implementa-

ción de los acuerdos sea tan contundente que permita un espacio amplio para la participación popular como una refrendación del constituyente primario que blinde el acuerdo de legitimidad hacia el futuro. Algunos analistas han propuesto los cabildos abiertos como mecanismos participativos para la implementación de los acuerdos que cumplan esta misión de fortalecimiento de la legitimidad política. Frente a la legalidad de los mismos no existe ninguna duda.

Varios de los intervinientes en el Foro reconocen la relación directa que existe entre la celeridad en la implementación de los acuerdos y el éxito alcanzado por los mismos en la estabilidad de la paz. Con esta claridad se justifica el inicio del Fast track teniendo en cuenta que se otorga a la paz el reconocimiento como un valor superior e inalienable para la sociedad colombiana.

Los instrumentos sobre los que se requiere mayor celeridad para fortalecer el proceso y mantener el cese al fuego son como se han mencionado: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Amnistía para los combatientes; en el marco de la JEP es que se espera por parte de las víctimas la garantía de los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La rigurosidad y satisfacción de las víctimas, y de la sociedad en general, con este sistema transicional de justicia garantiza en el mediano y largo plazo la estabilidad de la paz. Es esta la justificación para el inicio expedito del mecanismo de Fast track que abre paso a la implementación de la justicia transicional en el marco del nuevo acuerdo de paz.

<sup>1</sup>Al respecto ver Sentencia de la Corte Constitucional, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa (Sentencia C-699, 2016)

# Proyecto de Ley de Amnistía

El proyecto de ley de Amnistía plantea para el legislativo y para la ciudadanía, una discusión fundamental sobre la que ya existe un acuerdo definido en el texto firmado en el Teatro Colón el pasado 24 de noviembre.

Sobre la disyuntiva entre justicia e impunidad, se le impone al poder legislativo, como representante legítimo de la ciudadanía, hacer la pedagogía necesaria y suficiente que permita una comprensión menos positivista y más contemporánea sobre la justicia acorde con el proceso de transición que implican los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

En temas prácticos la ley de amnistía tiene la tarea de precisar quiénes serán sujetos del perdón que otorgue la sociedad y el Estado, en qué grado se otorga ese perdón y bajo qué condiciones de cumplimiento de valores como verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición, de acuerdo con el derecho internacional.

Este es un compromiso esencialmente con las víctimas del conflicto, quienes por primera vez se ven reconocidas en un acuerdo de paz en Colombia. Un asunto fundamental que debe resolver el Legislativo es la conexidad de otros delitos con el delito político, constituyendo el marco de interpretación para la materialización de la Jurisdicción Especial de Paz.

Para el caso del delito de narcotráfico, se establece desde los opositores a los acuerdos, la imposibilidad de conexidad con el delito político. La respuesta desde el gobierno nacional se desprende de la interpretación en la cual será la JEP, la encargada de definir la existencia de la conexidad o no en cada caso particular.

Otros delitos sobre los que existe resistencia para acep-

tar o establecer la conexidad con el delito político y en esta medida la amnistía, se refiere al secuestro y el terrorismo. El legislativo y la JEP, deben ser precisos en el desarrollo y aplicación normativa al respecto, teniendo en cuenta que para delitos considerados no amnistiables existe la posibilidad de imponer penas alternativas que en ningún caso se pueden confundir con impunidad. Si bien la Constitución de 1991 prohibió la amnistía, reconoce también la opción del delito político y todo su desarrollo como una opción política para confrontar al Estado, cuando se considere que existe una situación de injusticia o que afecte gravemente el bienestar general. Se reconoce entonces el delito político como una reivindicación de aspiraciones de orden general y no para el beneficio particular o individual.

La intervención ciudadana apunta a apoyar la conexidad del narcotráfico con el delito político y así mismo en la necesidad de conocer la verdad, en tanto el castigo y la cárcel no tendrían un efecto reparador, sobre todo en el contexto colombiano.

La participación ciudadana se considera como un elemento fundamental en la implementación de los acuerdos, y pasa por la apertura amplia para la discusión, así como por la comprensión ciudadana sobre la justicia restaurativa.

La ciudadanía comprende suficientemente la necesidad de la amnistía dentro del proceso de paz como el requisito inicial para la desmovilización del ejército guerrillero y su dejación de armas. Sin embargo la sociedad civil ha manifestado algunos reparos o advertencias que se hace necesario resaltar acá:

Sobre los crímenes de guerra no amnistiables

“el Artículo 22 del proyecto de ley de amnistía, tal como está redactado, implica que sólo los crímenes de guerra calificados como graves – siendo su gravedad definida en términos de sistematicidad – estarán excluidos de amnistía o indulto. La sistematicidad no es condición esencial para que se configure un crimen de guerra, ni la gravedad de los mismos depende del carácter sistemático con el que se ejecuten.

En ese sentido, el condicionamiento previsto en el proyecto de ley de amnistía no es coherente con el derecho penal internacional y, además, abre la posibilidad de que ciertos crímenes de guerra queden impunes. Esto supondría un incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado colombiano y pondría en tela de juicio su voluntad para administrar pronta y cumplida justicia, lo cual a su vez podría allanar el camino a la intervención de la justicia internacional en el país”. (Corporación Excelencia en la Justicia, 2016).

La concordancia entre el acuerdo de paz y el derecho internacional garantiza la estabilidad del acuerdo en el mediano y largo plazo y aleja la posibilidad de intervención de la Corte Penal Internacional, garantizando la durabilidad del mismo acuerdo.

“El Senado presupone no sólo la adopción del Acto Legislativo señalado, sino que requiere que al menos una parte de la Jurisdicción Especial para la Paz esté en operación, en especial, la Sala de Amnistía o Indulto.

Así, por ejemplo, el Artículo 18 del proyecto de ley establece que la amnistía de iure para los integrantes de las FARC condenados, procesados, investigados, incluso las personas que se encuentren en proceso de dejación de armas, que no se materialice en un plazo de 45 días desde la entrada en vigencia de la ley, podrá ser solicitada ante la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Cabe mencionar que el proyecto de Acto Legislativo

que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (a la que pertenece la Sala de Amnistía e Indulto) se encuentra en trámite en el Congreso, por lo que dicha Sala no existe aún. En el mismo sentido, el proyecto de ley de amnistía dispone que la Sala de Amnistía e Indulto aplicará estos tipos de perdón una vez entre en vigencia dicha ley (Artículo 21), es decir, la Ley de Amnistía. No se entiende cómo, de entrar en vigencia la ley de amnistía, se exija que una Sala que aún no existe, empiece a operar; esto sin contar con el tiempo que tomará la elección de los magistrados y la disposición de medios para que puedan cumplir con sus funciones.

Por lo tanto, una cláusula que condicione la entrada en vigencia de este tipo de disposiciones a la adopción del Acto Legislativo resultaría más que pertinente, incluso en el entendido de que una y otras disposiciones, por virtud del procedimiento legislativo especial, llegaran a entrar en vigor con muy pocos días de diferencia”. (Corporación Excelencia en la Justicia, 2016).

Las objeciones desde la sociedad civil son relevantes y lejos de obstruir el proceso de paz buscan fortalecer y blindar su implementación lo cual se evidencia en su espíritu crítico aunque propositivo, para la reflexión y toma de decisiones del Congreso de la República en esta importante responsabilidad sobre la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

# Referencias

Corporación Excelencia en la Justicia. (27 de Diciembre de 2016). Corporación excelencia en la Justicia. Obtenido de Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga:

<http://cej.org.co/index.php/sala-de-prensa/comunicados-cej>

Uprimny, R. (26 de Noviembre de 2016). Una refrendación progresiva. El Espectador.

Sentencia C-699, Procedimiento legislativo especial para agilizar acuerdo final para la terminacion del conflicto y construccion de la paz estable y duradera (Corte Constitucional 2016). Obtenido de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-699-16.htm>





Aplicación Mi Senado



/senadogovco



[www.senado.gov.co](http://www.senado.gov.co)



C i e l o d e  
**FOROS REGIONALES**  
SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

[www.forossenado.com](http://www.forossenado.com)